



Organización de los
Estados Americanos



OAS/Ser.L/XXV.2.1
GT/PSS/doc.16/16

**Examen de los Informes presentados por los Estados Partes al Primer
Agrupamiento de Derechos del Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de
San Salvador" (arts. 9, 10 y 13)**

OBSERVACIONES FINALES A LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

3º Período de Sesiones
Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales
previstos en el Protocolo de San Salvador
Washington, D.C., 3-6 de mayo 2016

I. Introducción

1. El Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador quiere expresar su solidaridad con la República Oriental del Uruguay y con sus habitantes en un momento tan doloroso, dadas la dimensión del tornado y de las inundaciones que están afectando a varias zonas del país, motivando evacuaciones de personas y graves consecuencias económicas y sociales.

2. La República Oriental del Uruguay ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, el 21 de noviembre de 1995 e hizo el depósito del instrumento en febrero 1996. Se destaca especialmente que el país, a través de la representación ante la OEA, ha participado activamente en el proceso de definición de los indicadores de progreso para medir el cumplimiento de este importante Tratado de Derechos Sociales. Asimismo el Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador (en adelante, GT, Grupo de Trabajo o GTPSS) agradece al Estado de Uruguay su disposición para responder los indicadores solicitados y destaca que ha cumplimentado los pasos formales previstos en el Documento *Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador* (OEA/Ser.L/XXV.2.1; GT/PSS/doc.2/11 rev.2) que fue aprobado en el marco de la Asamblea General de la OEA, en junio 2012 (AG/RES 2763, XLLII-0/12) y que dan cumplimiento a lo previsto en el artículo 19 del Protocolo.

3. El GT examinó el informe recepcionado el 23 de abril de 2015 por parte Uruguay correspondiente al primer agrupamiento de derechos en sus 1º y 2º períodos de sesiones, desarrollados del 24 al 26 de febrero y del 14 al 16 de octubre de 2015, celebró la audiencia con el Estado parte el 16 de octubre de 2015 y durante el 3er período de sesiones, celebrado del 3 al 6 de mayo de 2016, aprobó las siguientes observaciones finales.

4. Las Observaciones Finales sintetizan los resultados del proceso de monitoreo en materia de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el primer agrupamiento de derechos: derecho a la salud (Art. 10 PSS), derecho a la seguridad social (Art. 9 PSS) y derecho a la educación (Art. 13 PSS); respecto del informe remitido por el Estado de Uruguay que ratifica la documentación contenida en su primer informe (Nota N° 185/2015 del 5 de noviembre, 2015).

5. El GT reafirma que el sistema de informes a través de indicadores de progreso buscan: *“estimular en los Estados un proceso de evaluación y de medición de cumplimiento de derechos sociales que trascienda la idea de mero reporte, sino que se convierta en un instrumento útil para el diseño y evaluación permanente para las políticas públicas al interior de los Estados tendientes a asegurar el cumplimiento del conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales”* (párr. 9 Documento Indicadores, OEA/Ser.L/XXV.2.1; GT/PSS/doc.2/11 rev.2).

6. El GT agradece especialmente a la República Oriental de Uruguay el proceso desarrollado y felicita al Estado por haber cumplimentado la etapa de monitoreo correspondiente al primer agrupamiento de derechos, celebra la calidad del diálogo constructivo que mantuvo con el Sr. Embajador acreditado ante la OEA y la delegación

durante la audiencia pública, como también las respuestas dadas a las diversas preguntas formuladas, y la predisposición para consolidar el proceso iniciado en torno a la implementación de indicadores de progreso. Se reitera la necesidad de responder los indicadores que no han sido remitidos por el Estado parte y que en futuros informes se requiere que el Estado pueda informar. Al respecto, en Anexo de este Documento se listan los indicadores solicitados.

II. Consideraciones generales del proceso/informes

7. El Grupo de Trabajo desea sintetizar diversos elementos señalados en los documentos metodológicos sobre la importancia del proceso de informes:

- a. **La generación de indicadores para los informes proporciona elementos para diseñar y evaluar las políticas para el avance de los derechos humanos.** *“Los objetivos principales de los indicadores (...) buscan contribuir a que los Estados Parte cuenten con herramientas útiles para realizar un diagnóstico de la situación de los derechos contenidos del Protocolo, establecer los temas y las agendas pendientes a partir de un diálogo participativo con la sociedad civil, y formular estrategias para satisfacer progresivamente el programa de derechos contenido en el Protocolo. Se busca estimular en los Estados un proceso de evaluación y de medición de cumplimiento de derechos sociales que trascienda la idea de mero reporte, sino que se convierta en un instrumento útil para el diseño y evaluación permanente para las políticas públicas al interior de los Estados tendientes a asegurar el cumplimiento del conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales.”* (Doc. Ind. Parr. 9).
- b. **Los procesos para la elaboración de los informes, deben considerar la participación de la sociedad civil y el establecimiento de metas de avance en la agenda de los derechos humanos.** *“Uno de los aspectos imprescindibles para iniciar el proceso previsto, es la fijación de objetivos y metas prioritarias por parte de cada Estado, las que deben ser definidas a partir de una estrategia o plan de realización, acordes con un período de tiempo y mediante un proceso de discusión, debate y consenso con los diferentes actores políticos y sociales de cada Estado, contando con un cronograma detallado que permita la supervisión del cumplimiento de los objetivos propuestos (...) El diálogo social y político que puede desencadenar el proceso de elaboración de los informes y su supervisión será un hecho apreciable en sí mismo considerado como estrategia de garantía de los derechos sociales en los Estados Parte. Cabe destacar que se trata de un proceso paulatino, que se irá perfeccionando con el tiempo y el curso que se le imponga al mismo, sin embargo se valora especialmente la voluntad que manifiesten los Estados para efectivizarlo”* (Doc. Ind. Parr. 12).
- c. **Es fundamental la inclusión de indicadores con enfoque transversal.** *“Equidad de género, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidades-diversidad étnica y cultural –en particular pueblos indígenas y afrodescendientes, y la incidencia de la sociedad civil en la formulación de avances legislativos y políticas públicas”* (Doc. Parr. 11). Se reitera la recomendación para que el Estado de Uruguay asuma las medidas necesarias para que sus registros estadísticos incluyan los elementos que permitan evaluar el grado de avance en estas perspectivas, centrales para el cumplimiento del PSS. El GT destaca la preocupación manifestada por el

Estado parte respecto a la autoidentificación de la población con ascendencia indígena (Censo de Población 2011) y recupera los esfuerzos que manifiesta está realizando en relación con la protección de los derechos de quienes se autoperciben como indígenas. En próximos informes, sería sumamente relevante que el Estado informe los resultados de estas indagaciones.

- d. **Utilización de los indicadores en la evaluación de la situación de los DESC.** Los indicadores de progreso constituyen herramientas útiles para los Estados en la medida en que se asuma que se trata de aproximaciones múltiples al estado de realización de los DESC, en el marco de las obligaciones contempladas en el Protocolo de San Salvador. En la medida que no sean considerados de manera aislada, sino en sus múltiples vinculaciones, debido a que los indicadores no reflejan una correspondencia lineal entre el grado de realización/avance en la garantía de los DESC y el nivel de cumplimiento estatal de sus obligaciones, se podrá interpretar y dar evidencia respecto del grado de avance del cumplimiento de derechos. En concordancia, la evaluación debe interpretarlos en su conjunto.
- e. **Construcción de indicadores para los informes.** Aun cuando la resolución AG/RES. 2713 (XLII-O/12) señala que la aprobación del documento *Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador. Primer agrupamiento de derechos*, se realiza bajo “el entendido de que se trata de pautas y criterios a los Estados parte, los cuales estarán en condiciones de adecuarlos a las fuentes de información a su disposición para cumplir con lo dispuesto en el Protocolo”, el Grupo de Trabajo destaca la importancia de que los Estados Parte vayan proveyendo los medios para calcular todos los indicadores, considerando la recolección de la información pertinente, así como la ampliación de muestras que permitan el cálculo de los desagregados necesarios, asegurando los recursos para contar con flujos permanentes de información actualizada. Al respecto, el GT pondera los esfuerzos que la República Oriental del Uruguay se encuentra realizando en torno a distintos Observatorios para recolectar y producir información. El GT mira con beneplácito la existencia del *Observatorio Social de Indicadores* en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), del *Observatorio Uruguayo de Políticas Públicas* de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que concentra, de acuerdo al informe nacional, una serie de indicadores necesarios para el diseño y evaluación de políticas públicas. Este tipo de acciones, es considerada por el GT de suma relevancia en tanto permiten, de manera coordinada con los requerimientos en el ámbito del presente sistema de informes, potenciar las acciones y evaluar los avances en torno al cumplimiento de las obligaciones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) contenidos en el PSS. El GT hace votos para que el Estado parte fortalezca estas instancias y se provean medidas que permitan consolidarlas en el mediano y largo plazos, incorporando gradualmente indicadores de proceso y señales de progreso cualitativas.
- f. **Desagregación de datos.** Se recuerda a los Estados parte del PSS que es necesario que presenten la información con el mayor grado de desagregación posible. Significa que las fuentes de información deben prever la posibilidad de clasificar la información por sexo, incluyendo consideraciones de género y orientación sexual; condición de migrante, edad (en caso de rangos de edad consignar los utilizados por el sistema estadístico nacional), área de residencia: localidades urbanas y zonas rurales, de acuerdo con los clasificadores nacionales (Nº de habitantes por municipio/localidad),

nivel socioeconómico: de acuerdo a los clasificadores nacionales. Otra opción posible es considerar la distribución de ingresos de los hogares por quintiles. En el caso de las pertenencias étnicas consignar datos vinculados a pueblos originarios, por grupos lingüísticos o las formas adoptadas por el país. En el caso de los afrodescendientes consignar de la misma manera. Las personas con discapacidad, en la medida de lo posible, el tipo de discapacidad (física, mental, sensorial, entre otras), a partir de la utilización, preferentemente, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF-OMS-OPS).

8. El proceso completo de revisión del informe para el primer agrupamiento de derechos derivó en la generación de dos documentos del Grupo de Trabajo para la República Oriental del Uruguay. En su análisis inicial de febrero de 2015, el GT solicitó completar información para un subconjunto de indicadores además de incluir recomendaciones preliminares, las cuales se retoman en el presente documento de observaciones finales, de modo de que en futuros informes se completen los indicadores (SEDI-DSI-086/15 del 7 de agosto, 2015).

9. El GT destaca como una actividad positiva por parte del Estado la designación del equipo de Perspectivas Transversales de la Dirección Nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), para la coordinación y elaboración del informe nacional. El Estado parte señala que, en el caso del derecho a la salud, los aportes fueron provistos por el área Estadística, de la Asociación de Servicios de Salud del Estado, por el área de Economía de la Salud, del Ministerio de Salud Pública y por la Agencia Nacional de Evaluación a través de la oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el caso del derecho a la seguridad social, remitieron indicadores la Secretaría Técnica del Consejo de Políticas Sociales, el Ministerio de Desarrollo Social, la Asesoría de Presidencia del Banco de Previsión Social; en el caso del derecho a la educación, los aportes provinieron de la Dirección Nacional de Educación y del Área Estadística del Ministerio de Educación y Cultura. El GT reitera con satisfacción que este tipo de prácticas son las recomendadas a los efectos de hacer palpable el principio de devolución con el cual se solicitan los informes y promueve la continuidad de este tipo de equipos para la evaluación permanente y para la elaboración de los próximos informes. Promover la cooperación interinstitucional y el diálogo continuo de las distintas áreas sociales es un indicador de fortalecimiento de las capacidades estatales que optimizará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el PSS y que permitirá avanzar en el plan que se ha propuesto el Estado parte de alcanzar: *“todos los derechos para todas las personas”*.

10. **Participación de la sociedad civil en el proceso de informes como también en el diseño de un plan de desarrollo.** El informe de Uruguay presenta una descripción de las acciones participativas desarrolladas especialmente en el caso de educación. Al respecto, el Estado parte informa que la ley 18437: Ley General de Educación surge en parte como resultado del Debate Nacional de Educación impulsado en el año 2005 un proceso amplio incorporando la pluralidad de opiniones y acciones, a partir de cinco ejes: i) educación para todas las personas, a lo largo de toda la vida; ii) educación y ciudadanía, iii) formación en derechos humanos; iv) educación en el modelo de desarrollo nacional; v) educación en la sociedad del conocimiento incorporando las nuevas tecnologías de información (TICs). El Estado parte señala que además de un proceso participativo más amplio, se incorporaron poblaciones antes no incluidas, como primera infancia. También una definición amplia de educación que incluye la formal e informal. El GT destaca la relevancia de este debate y considera central a futuro se profundicen este tipo de acciones para todos los derechos, al

mismo tiempo solicita al Estado parte la incorporación de indicadores específicos de estas acciones.

11. El GT pondera que el Estado parte asume la necesidad de promover procesos de cambio y transformación estructural, los que en opinión del Estado parte requieren ser realizados en base a *“un amplio consenso que generará las bases tanto para los ajustes inmediatos como para hacer un seguimiento permanente de la marcha del sistema de seguridad social”*. Para ello Uruguay abrió la convocatoria para el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, que comenzó en el año 2007 cuando el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Sectorial de Seguridad Social integrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Salud Pública (MSP), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Banco de Previsión Social (BPS), convocaron a los actores gubernamentales, sociales, académicos y políticos a un Diálogo Nacional en Seguridad Social. La iniciativa se desarrolló, según informa el Estado parte en dos etapas: i) 2007 –2008: cuyo resultado fue el impulso de medidas de reforma en seguridad social, ii) 2010 –2013: instancias de debates con la presentación de dos anteproyectos de ley y uno de decreto referidos a: desafiliación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), la jubilación parcial y modificación en torno a la determinación de discapacidad. El GT destaca nuevamente el alto valor de la iniciativa y hace votos por el fortalecimiento futuro de estas acciones participativas con la sociedad civil. El GT enfatiza que el Estado Parte se ha comprometido, en su informe, a ampliar la participación social en el sistema de Seguridad Social, desde aumentar el número de representantes en el directorio del organismo responsable de la seguridad social (el Banco de Previsión Social) como en las áreas correspondientes a personas con discapacidad, infancia, adultos mayores. Al respecto, el GT solicita que en próximos informes, comunique los avances concretos en estos compromisos de gestión asumidos, y que consigne los indicadores específicos.

12. El GT pondera especialmente el reconocimiento que el Estado Uruguayo realiza sobre los déficits en materia educativa, especialmente a nivel de educación media, considerando este hecho como el primer paso necesario para iniciar un proceso de transformación en términos de prestaciones y garantías para la efectivización del derecho a la educación. El GT felicita al Estado parte por el compromiso asumido de alcanzar, para el año 2020, un gasto público en educación correspondiente al 6% del Producto Bruto Interno, dado que a la fecha de presentación del informe, el gasto en educación se ubica en torno al 4.5% del PBI; en el informe del año 2019, el GT cotejará el grado de avance en el cumplimiento de este compromiso.

13. **La progresividad en los indicadores y en la determinación de metas.** El GT reitera que ha recogido las normas aprobadas por la Asamblea General en el sentido de considerar que *“el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, entendiendo por ello la adopción de una política pública que considere a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos cuya realización completa en general no puede darse rápidamente y que por ello requieren de un proceso durante el cual cada país avanza con distintos tiempos hacia el logro de la meta. Este principio invalida las medidas regresivas, salvo casos extremos justificables, y descalifica la inacción.”* Asimismo, el GT celebra que es el propio Estado Uruguayo que reconoce la necesidad de promover transformaciones estructurales conforme al enfoque de derechos, y adjunta los compromisos de gestión para los próximos años. Estos compromisos y metas constituyen un elemento relevante a los efectos de medir la progresividad de las medidas adoptadas por el Estado parte.

14. Al respecto, el GT destaca que el gobierno uruguayo se ha comprometido en el campo de la seguridad social a disminuir la informalidad laboral, asumiendo disposiciones transitorias y de carácter “focalizador” a los sectores en condiciones de vulnerabilidad, considerando que las mismas serán transitorias. En paralelo, y como segundo compromiso de gestión sectorial, el Estado parte se compromete a ampliar la cobertura del sistema de seguridad social, a partir de “flexibilizar el acceso a las prestaciones”, al mismo tiempo que se propone otorgar un incremento en el valor de las prestaciones, particularmente a partir de incrementos progresivos en las de menor cuantía, facilitar y acelerar el otorgamiento de las prestaciones, acompañado de una ampliación en la provisión de bienes y servicios para las personas en situación de vulnerabilidad.

15. **Transversalidad de derechos.** La República Oriental del Uruguay, de acuerdo con lo expuesto, ha realizado esfuerzos importantes en generar información transversal, especialmente en la convocatoria de los Diálogos sectoriales, como también los equipos técnicos para la elaboración del informe de cumplimiento del PSS. Sin embargo, existe aún la necesidad de sumar esfuerzos para desagregar los indicadores en función de equidad de **género, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, diversidad étnica y cultural** –en particular **afrodescendientes, orientación sexual e identidad de género.**¹

16. En la importante información suministrada por la República Oriental del Uruguay, el GT celebra especialmente la comunicación sobre el desarrollo de un sistema nacional permanente de información con enfoque de derechos humanos, con base en los indicadores de progreso elaborados para el monitoreo del Protocolo de San Salvador. Asimismo, el GT alienta al Estado a dar cumplimiento al próximo proceso de presentación de informes correspondiente al segundo agrupamiento de derechos: derechos laborales y sindicales, derecho a la alimentación adecuada, derecho al medio ambiente y derechos culturales (AG/RES 2823, XLIV-0/14) previsto para junio de 2016.

17. A continuación, el GT presenta sus observaciones y recomendaciones finales luego de concluido el análisis de cada uno de los derechos informados, en el entendido que se trata del primer esfuerzo sistemático de evaluación a través de indicadores de progreso que asume el Estado parte y que establece la línea de base, sobre la cual se evaluarán los próximos informes correspondientes a estos derechos, una vez concluidas las evaluaciones de los dos primeros agrupamientos, a partir de la remisión del informe con ambos agrupamientos, previsto para junio 2019.

III. ASPECTOS POSITIVOS

18. El GT observa con satisfacción que la República Oriental del Uruguay presentó un informe estructurado de acuerdo a lo solicitado en la metodología y procesó la mayoría de los indicadores, aunque se solicita en los próximos informes se complete la totalidad de la tabla. Es decir, en una misma matriz las tres columnas con los tres tipos de indicadores de progreso y las señales de progreso cualitativas. Asimismo, el GT recuerda que el monitoreo por

¹ Similar recomendación formuló el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC a Uruguay en las Observaciones finales dictadas en el 45º período de sesiones, Ginebra, Suiza, 2010 (E/C.12/URY/CO/3.4)

indicadores permite ofrecer tanto al Estado parte, como a los titulares de los derechos del PSS, información para verificar el compromiso del Estado con los derechos y, además, hace posible valorar el cumplimiento progresivo de los mismos. De allí que la lectura en una misma matriz de los tres tipos de indicadores permite una lectura y análisis articulado de las respuestas estatales.

19. Respecto a la adopción de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el GT reconoce que el Estado uruguayo ha ratificado la mayoría de estos instrumentos; dando cuenta de su voluntad *en pro* de los Derechos Humanos y con compromisos firmes de ampliar el conocimiento de situaciones particulares como la pertenencia indígena.

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL (Art. 9 PSS)

20. **Recepción del derecho.** La Constitución de la República Oriental de Uruguay establece la garantía de todos los habitantes a la Seguridad Social, donde instituye que las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios, y se revisarán los montos en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la administración central y que deben ser revisados conformes a patrones de movilidad en las prestaciones. El GT felicita al Estado Uruguayo por el aumento en la proporción de cotizantes en relación a la PEA (Población Económicamente Activa) que pasó de un 73% de cotizantes en 2009 a 80% en 2011. En 2012 el total de cotizantes era del 74,4%, de los cuales el 73,1% eran varones, el 72,6% mujeres, mientras que la cobertura de la población afrodescendiente es del 63,4% y los cotizantes de población blanca alcanzaban el 75,9%. El GT recoge con beneplácito los aumentos de cobertura, con una incidencia en términos de brecha de género menor, y recomienda sumar mayores esfuerzos para continuar ampliando la cobertura, en especial de la población afro.

21. El GT celebra los esfuerzos realizados por Uruguay en informalidad laboral, donde el estímulo a la incorporación de nuevos grupos de trabajadores promovió un incremento de un 13% en los puestos de trabajo en el período 2009-2012. Este incremento fue relevante en relación con las mujeres: 14,5%, al mismo tiempo que se destaca las mujeres insertas en el servicio doméstico remunerado, el incremento en la cobertura en seguridad social fue del 21,8% en el 2013, como también en el caso de los trabajadores de la construcción, que para el mismo año incrementaron en 56,2% en la afiliación, informando el Estado parte que iniciaron una campaña de difusión de información sobre el acceso a derechos por diversos medios de comunicación. Estas medidas se complementan con la ley de asignaciones Familiares (Ley 18.227 del 2009) que no discrimina a trabajadores formales, de informales o desempleados, por lo cual se prioriza la incorporación de sectores en situación de vulnerabilidad y con cobertura en salud para el trabajador/a y su pareja, hijos e hijas menores de edad y personas con discapacidad. El GT destaca además la existencia del seguro de desempleo, que según el informe del Estado, en especial la consideración de situaciones particulares como la presencia de hijos e hijas en el hogar, a los efectos de incrementar el monto hasta un 20% más o la extensión del límite máximo de percepción para mayores de cincuenta años. Estos importantes esfuerzos realizados por el Estado de Uruguay serán monitoreado en los próximos informes.

22. El GT felicita al Estado parte por el aumento de cobertura en la registración, a partir de la inclusión en el régimen de monotributo para prestadores de servicios como: cuidado de bicicletas, automóviles, motos y otros automotores; limpieza de vidrios de inmuebles y de automotores; guías de turismo; paradas de taxis; paseadores y entrenadores de mascotas; servicios de utilización de espacios radiales en radioemisoras del interior del país con un máximo de 5 horas semanales; servicios de apoyo a pescadores artesanales; deportistas, ciclistas, árbitros profesionales, trabajadores de la actividad hípica y el trabajo sexual. Además, en lo que respecta a las trabajadoras sexuales, la Ley N° 17.515 de Trabajo Sexual de año 2002 fue un avance en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras, y en el año 2009 se extendió el reconocimiento a los varones trabajadores sexuales y a las personas transexuales. Según el informe del Estado, se amplió la cobertura en 2011 a través del “Monotributo social MIDES” que con carácter de tributo único, sustituye las contribuciones al BPS y al organismo de recaudación tributaria, y está dirigido a personas viviendo en hogares por debajo de la línea de pobreza, que producen y/o comercializan bienes o prestan servicios.

23. El GT destaca las reformas realizadas por la República Oriental del Uruguay en materia previsional, incorporando nuevos colectivos, y medidas de acción positiva como el reconocimiento de un año de aportes para las mujeres con hijos/as o niños/a a cargo hasta un tope de cinco años, promoviendo la oportunidad de completar en muchos casos los años de aporte para acceder a la jubilación. Similar efecto tuvo, según el informe del Estado parte, la ley 18.095 que establece la prima por edad a los jubilados del BPS de más de 70 años y de menores ingresos, que de manera gradual se fueron incorporando, comenzando por los jubilados de más de 80 años, y así hasta alcanzar en el año 2013 un número importante de beneficios.

24. El GT pondera medidas especiales reparatorias, como el caso de las pensiones implementadas en 2012 para hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia doméstica que hayan quedado huérfanos, y para las víctimas de delitos violentos, que se suman a las pensiones especiales reparatorias, que computan nuevas causales de jubilaciones y pensiones a personas que se vieron impedidas de trabajar durante la dictadura militar uruguaya, en el período comprendido entre el año 1973-1985.

25. Otra de las novedades en materia de recepción del derecho que el GT desea felicitar al Estado parte, es la extensión de la licencia y el subsidio por maternidad a 14 semanas y en 13 días la licencia a los padres por nacimiento, como también la implementación de un subsidio parental que permite a la madre o al padre, según su decisión, disponer de media jornada para el cuidado del niño o niña hasta los 6 meses de vida. Cabe señalar el alto impacto de esta medida de conciliación trabajo-familia, en tanto el Estado señala que desde su entrada en vigencia, en 2014, existen 15 mil solicitantes de la misma. El GT refuerza que ésta disposición se encuentra en la dirección de garantizar el derecho al cuidado, y que se espera se dé continuidad a las medidas impulsadas en el sistema nacional de cuidados.

26. La apertura al proceso de desafiliación voluntaria de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) en febrero de 2014, con la posibilidad de pasar al régimen de transición, administrado por el BPS, siempre que estos afiliados hayan optado por quedar incluidas en el régimen mixto y tengan más de 40 años de edad a la fecha de la reforma en 1996, sin estar obligadas a hacerlo implica -en opinión del GT- un importante esfuerzo por dotar de equidad en los sistemas previsionales. El informe del Estado parte señala que en solo 4 meses, 4000 personas ejercieron la opción de revocar o desafiliarse del pilar de ahorro

individual. El GT recomienda al Estado de Uruguay reforzar la acción comunicativa de modo de poder garantizar acceso a la información y habilitar la posibilidad que continúe la elección por parte de los trabajadores.

27. **Contexto financiero y compromisos presupuestarios:** El sistema de Seguridad Social en Uruguay, se ha caracterizado por una financiación tripartita, mediante aportes de trabajadores, empleadores y del Estado, que de acuerdo al informe del Estado parte, el porcentaje de aportes actual a cargo de los empleadores 24,76%, ii) porcentaje a cargo de los trabajadores formales 43,47%, y iii) porcentaje de financiamiento del Estado 31,7%. El GT desea conocer la razón de una contribución tan elevada para los trabajadores y en próximos informes quisiera recibir información sobre las razones y eventuales acciones de reducción.

28. **Igualdad y No discriminación:** El GT destaca que por ley 16713, la República Oriental del Uruguay establece el principio de universalidad del sistema previsional, situación que el GT constata en los indicadores de cobertura que presentados, y reitera la necesidad de continuar fortaleciendo estas acciones en pos del principio de progresividad. Sin embargo el GT considera de suma relevancia contar con indicadores específicos que permitan conocer el grado de implementación de las anteriores medidas y la efectiva inclusión de personas con discapacidad, afrodescendientes, entre otros sectores en condiciones de vulnerabilidad que requieren medidas de acción positiva.² Asimismo recuerda al Estado parte la relevancia de desarrollar medidas de acción positiva para incorporación de las mujeres en la seguridad social, tanto para la formalización de su relación laboral como para el ejercicio efectivo de la protección que la seguridad social implica. El GT recuerda que la difusión de derechos y las acciones comunicativas son centrales para fortalecer y empoderar a las mujeres.³

29. **Acceso a la justicia:** El GT insta al Gobierno de Uruguay a contar con indicadores de acceso a la justicia en materia de seguridad social, que acompañarían los importantes esfuerzos que se han verificado en el accionar estatal. Cabe recordar que el acceso a la justicia es una garantía efectiva para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer sus derechos.

DERECHO A LA SALUD (Art. 10 PSS)

30. **Recepción del derecho:** el GT observa un importante esfuerzo realizado por el Estado, desde 2007 a la fecha, por revertir la conceptualización restrictiva del derecho a la salud contenida en el art. 44 de la Constitución de la República de Uruguay. Para ello, estableció por medio de la ley 18.211/07 el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que busca implementar cambios estructurales en el modelo de gestión del Sistema de Salud y las instituciones que lo integran. Informa el Estado parte que el nuevo sistema se fundamenta en: universalidad en el acceso, cobertura integral a partir de una definición taxativa de los

² En similar dirección se pronunció el Comité PIDESC, recomendando a Uruguay que adopte medidas adicionales encaminadas a promover la igualdad de acceso de las personas con discapacidad al empleo y dedique especial atención a su acceso al empleo en el sector privado, Comité DESC; 2010, *op. cit.*

³ En el año 2010 las Observaciones finales del Comité Desc señalaban la escasa representación femenina en los distintos niveles de gobierno y la existencia de disparidades significativas en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo para las mujeres, dado el porcentaje mayoritario de informalidad laboral de las mujeres, menores niveles de calificación y discriminación salarial. El Comité alertó al Estado parte sobre la situación de desventaja que atraviesan las mujeres afrodescendientes, Comité DESC, 2010, *op. cit.*

servicios que los prestadores deben brindar para ser considerados integrales, sin que guarde relación con el nivel de ingresos de las personas o con el porcentaje de aportes realizados, aumento en la inversión y contribuciones presupuestarios a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Este sistema, en definición del Estado parte, incorpora numerosas instancias prestacionales, como las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMCS), el seguro nacional de salud (SNS) administrado por la Junta Nacional de Salud (JUNASA) y con un rol de rectoría por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP). De este modo, Uruguay ha desarrollado a partir del SNIS un sistema mixto de prestadores públicos y privados, donde el asegurado –todos los ciudadanos y ciudadanas- a través del Seguro Nacional de Salud elige dónde se asistirá. El financiamiento es mixto, y el Estado parte señala que constituye un sistema solidario y redistributivo, donde cada asegurado aporta de acuerdo a sus ingresos y bajo parámetros de calidad, estableciendo una incorporación progresiva de la población al sistema. El GT recuerda al Estado parte que es importante presentar los datos de cobertura en porcentaje y no en números absolutos ya que permiten ponderar mejor el impacto de la medida adoptada.

31. **Contexto financiero y compromisos presupuestarios:** El GT celebra el avance del gasto total en salud, que en el año 2013 alcanza el 8,8% como porcentaje del producto interno bruto⁴, destacando el Estado parte que los servicios hospitalarios representan casi tres cuartas partes del GPS. El GT expresa su preocupación con las actividades de investigación y desarrollo experimental en materia de salud ubicando solamente 0,1%.

32. El Estado parte ha creado el Fondo Nacional de Salud (FONASA), donde los trabajadores formales, pasivos y empleadores, aportan en proporción a su salario (4.5% y 6% en caso de tener personas a cargo) y automáticamente puede elegir el prestador (público o privado) para ellos, sus cónyuges, niños, niñas y adolescentes y/o adultos mayores a cargo con discapacidad. El Estado parte informa también sobre la creación de un Fondo Nacional de Recursos que, dadas ciertas condiciones, garantiza el acceso gratuito a tratamientos y medicamentos de alta complejidad para patologías de baja prevalencia.

33. **Capacidades estatales:** el GT reconoce el avance del índice de 97,5% de la población con cobertura en salud mediante la Creación del Sistema Nacional Integrado de Salud.⁵ El GT valora los importantes avances en términos de cobertura realizados por el Uruguay y recomienda continuar relevando información al respecto, de modo de poder medir avances en torno a las garantías de acceso universal y de calidad en salud. Al mismo tiempo recuerda la importancia de completar la totalidad de indicadores solicitados.

34. El GT también resalta la sistematización de la encuesta anual sobre la satisfacción de los usuarios del sistema de salud y los criterios usados (accesibilidad, calidad, cumplimiento de los tiempos de espera, alcance y veracidad de la información a disposición) y hace votos

⁴ Fuente. CEPALSTAT; fecha de visita abril 2016, <http://interwp.cepal.org/>

⁵ El Comité DESC, en el marco de las recomendaciones realizadas al Estado uruguayo en agosto de 2010 observa con inquietud los importantes desequilibrios regionales en el acceso a la atención de la salud y la calidad de los servicios, en concreto la concentración de médicos en torno a la capital y las elevadas tasas de mortalidad infantil y de lactantes en las regiones más apartadas, vinculadas al cumplimiento del artículo 12 de PIDESC. A su vez, recomienda al Estado parte que siga intensificando la aplicación de medidas para asegurar el acceso a una atención de la salud universal, entre otros medios, paliando los desequilibrios regionales en el acceso a dicha atención y haciendo frente a la incidencia de enfermedades prevenibles en los niños, Comité PIDESC; *op. cit.*

para que se expandan a otros sectores, de modo de avanzar en la incorporación de señales de progreso cualitativas para todos los derechos contemplados en el PSS.

35. **Igualdad y No discriminación:** el GT celebra la adopción de los marcos jurídicos relevantes pioneros en la región, como: la regulación del aborto (Ley 18.987) que permite la interrupción voluntaria del embarazo antes de las doce semanas de gestación; y de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos (Ley 18.426) y recuerda la importancia de consignar información sobre el impacto de dichas normas a partir de incorporar indicadores, entre otros: número de abortos por edad, ingresos, condición socio-económica de la mujer y otros datos). El GT recomienda al estado uruguayo avanzar en estas mediciones que tendrán un efecto relevante en relación a la discusión que se encuentran dando otros países de la región y disponer de mayor información para conocer su evolución.⁶

36. El GT reconoce especialmente los avances en términos de acceso equitativo e igualitario al trasplante de órganos, en materia de enfermedades de transmisión sexual en el marco del Programa Nacional de ITS-VIH/Sida que prioriza la atención integral de la mujer embarazada con especial énfasis en materia de prevención, a lo cual se suma atención integral a las personas viviendo con VIH, con resultados destacados en términos de prevención e incidencia. En materia de Salud Mental, se destaca el Programa Nacional de Salud Mental que definió un Plan de Prestaciones con el objetivo de mejorar la equidad en el acceso, y la atención en los abordajes psicoterapéuticos y psicosociales, a lo cual se suman esfuerzos en materia de salud rural.

37. **Acceso a la información:** El GT destaca la creación del Formulario Terapéutico Médico (FTM) que es un catálogo de prestaciones de cobertura farmacológica obligatoria para las Instituciones y Servicios de Salud públicos y privados y las medidas de reducción y exoneración del costo de los medicamentos, como de la cobertura de los métodos anticonceptivos, a través de la cobertura gratuita y universal. El GT considera relevante las campañas sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, en especial la Ley N° 19140/2013 de promoción de hábitos alimenticios saludables en establecimientos educativos. El GT reconoce estas acciones en el marco del descenso de la desnutrición global, que se ubica en 11,3% la relación entre edad y talla (año 2007) y se inscribe en la mejora global de los indicadores vitales de salud.

38. **Acceso a la justicia:** El GT celebra la existencia de instancias administrativas para recibir denuncias sobre la falta de cumplimiento de las obligaciones en materia de salud, en el marco de una normativa que a desarrollado el Ministerio de Salud, en particular en el área de atención al usuario. El Estado parte también informa que existe para los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de presentar un recurso de amparo, que es habitualmente utilizado para el acceso a los medicamentos más costosos. El GT señala al Estado que es de suma relevancia establecer el número, frecuencia, tipo de demanda, resolución, ejecución y cumplimiento de la sentencia, entre otros indicadores a completar.

⁶ El GT recibió por parte de la sociedad civil de un informe de la Organización Iniciativas Sanitarias que recomienda se considere para Uruguay, “mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, facilitando el monitoreo ciudadano de la implementación de las políticas públicas” (1º de septiembre, 2014).

39. El GT recomienda la generación de datos sobre los servicios jurídicos gratuitos para demandar la protección del derecho a la salud, así como la información sobre las decisiones jurídicas con la intención de proteger el derecho a la salud.

DERECHO A LA EDUCACIÓN (Art. 13 PSS)

40. **Recepción del derecho:** El GT acoge con beneplácito que Uruguay ha ratificado la gran mayoría de tratados internacionales y declaraciones que reconocen el derecho a la educación, y en materia de años de escolaridad y aumento de gratuidad, que alcanza al nivel universitario. Se pondera asimismo las disposiciones normativas que incorporan el reconocimiento los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades. La Ley General de Educación aprobada en diciembre del año 2008 reconoce en su primer artículo el derecho a la educación como *un derecho humano fundamental*. (Art.1, Ley 18.437) Asimismo dispone que el sistema educativo incorpora tanto la educación formal, como la no formal.

41. La ley, en el artículo 7º establece la obligatoriedad de la educación inicial para los niños y niñas de cuatro y cinco años de edad, la educación primaria -de 6 años de duración- y la educación media básica -de 3 años de duración- y superior -también de 3 años de duración-. El GT toma nota de los datos informados por la República Oriental del Uruguay, que en el año 2010 alcanzaba una cobertura en educación inicial (4-5 años) del 88,4%; en el nivel primario es del 95,4% para niños y niñas de 6 a 11 años, en educación media –ciclo básico- 73,4% y media superior, entre 13 y 17 años de edad alcanzaba sólo el 43,2%. Estos datos, especialmente en nivel medio, condicen con lo manifestado por el Estado parte en relación a la necesidad de reforzar las acciones en materia educativa. El GT recuerda la necesidad de desagregar esta información por las categorías solicitadas, especialmente sexo, nivel socioeconómico, urbano/rural, población afrodescendiente entre otros.

42. El GT pondera que el Estado parte señale tendencias que resulta necesario revertir como la brecha en la cobertura a mayor edad. De acuerdo con los datos proporcionados por el Anuario de Estadística del Ministerio de Educación, se produce un descenso de la cobertura educativa conforme avanzan los años conjuntamente con el aumento de la desigualdad entre los diferentes quintiles. Significa, de acuerdo a la información oficial, que no sólo se va perdiendo cobertura a mayor edad sino también es la más baja para la edad más alta (a los 22 años es del 32,1%), sino que la brecha de cobertura entre el quintil más bajo y el más alto va en aumento, dando cuenta de una polarización educativa. El GT reitera que este tipo de información presentada por Uruguay es el primer paso para lograr revertir el proceso y avanzar en ampliar la cobertura y disminuir las desigualdades educativas, siempre que e acompañe con políticas públicas al respecto, y se siga monitoreando a partir de indicadores. Recomienda también el GT producir información sobre el porcentaje de jóvenes y adultos que participan en programas de formación y capacitación continua, o cobertura de jóvenes en educación técnico-profesional, entre otros indicadores.

43. **Contexto Financiero y Compromisos Presupuestarios.** El GT pondera la existencia de leyes y normativa para garantizar la gratuidad de la educación obligatoria en el Estado Uruguayo y toma en consideración los compromisos asumidos por el Estado para garantizar el aumento del Gasto Público en educación (6% del PIB en 2020). El GT destaca asimismo el alto porcentaje de cobertura del medidas de subsidio o apoyo a familias con dificultades socioeconómicas (86.6 %) y las becas educativas en todos los niveles alcanzan el 1,6%.

44. **Capacidades estatales:** la conducción del sistema educativo se divide en distintas instituciones: i) el Ministerio de Educación y Cultura a cargo de los principios generales de la educación, ii) la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y iii) la Universidad de la República (Udelar) que de acuerdo con lo manifestado por el Estado parte se desenvuelve de manera coordinada. Agrega el Estado parte que la Ley General de Educación establece líneas transversales como la educación en derechos humanos, la educación ambiental para el desarrollo humano sostenible, la educación artística así como también la científica y lingüística, la educación física, la recreación y el deporte y la educación sexual. El GT pondera estas líneas e invita al Estado parte a seguir avanzando e informando sobre el curso de acción de dichas líneas a partir de indicadores.

45. El GT reconoce el Plan Ceibal como una iniciativa relevante, que consiste en la provisión de una computadora portátil a cada niño/a y docentes de primero a sexto año de primaria de todas las escuelas públicas de Uruguay. El Estado parte informa que el Programa ha consolidado un sistema de evaluación de aprendizajes en línea y a partir del 2012 se implementa “Ceibal en Inglés” que brinda enseñanza de inglés a niños y maestros de 4to, 5to y 6to año de Educación Primaria.

46. **Acceso a la información.** El GT reconoce que el estado Uruguayo cuenta con el informe que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa realiza cada dos años y publica los resultados de las pruebas de evaluación nacionales o internacionales en las que el país participe, el acceso, la cobertura y la permanencia en cada nivel educativo, los resultados del aprendizaje, la relevancia y la pertinencia de las propuestas y contenidos educativos y la evolución y características del gasto educativo. El GT destaca asimismo el funcionamiento del Observatorio de la Educación, que aporta información estadística para la generación de indicadores del Sistema Nacional de Educación.

47. **Acceso a la justicia.** El GT recuerda que es fundamental disponer de información sobre esta categoría transversal y producir información sobre el número de denuncias relativas al derecho a la educación, recibidas, investigadas y resueltas por las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y/o educativas competentes en el país. Tampoco hay información sobre políticas de capacitación de jueces y abogados en derecho a la educación, que se recuerda, resulta de suma relevancia la disponibilidad de esta información.

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

48. La República Oriental del Uruguay ha cumplido con la obligación de entregar el informe sobre el avance de los derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con el Art. 19 del Protocolo de San Salvador, correspondiente al primer agrupamiento de derechos (seguridad social, salud y educación). El informe presentado revela las acciones principales que ha venido realizando el Estado para promover y garantizar los derechos a la seguridad social, salud y educación y que dan cuenta de medidas de avance relevantes.

El GT deja constancia que en esta primera etapa de monitoreo del Protocolo de San Salvador se ha realizado el análisis exclusivamente con base en la información oficial remitida por la República Oriental del Uruguay en su informe, sin utilizar fuentes adicionales. En el subsiguiente informe, cuando se incorpore información sobre el cumplimiento de los dos agrupamientos (previsto para junio 2019), y a los efectos de

cumplimentar el estándar de progresividad, se contrastará la información oficial con datos de organismos públicos no gubernamentales, defensorías del pueblo, auditorías y otros órganos de control gubernamental, organismos y organizaciones especializadas, entre otros, de modo de dar mayor alcance al proceso de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Protocolo de San Salvador.

Derecho a la Seguridad Social

49. El GT recuerda que el monitoreo por indicadores permite ofrecer tanto al Estado Uruguayo, como a los titulares de los derechos del PSS, información que permite verificar el compromiso del Estado con los derechos y, además, hace posible valorar el cumplimiento progresivo de los mismos. El GT considera especialmente el compromiso de gestión asumido por Uruguay para “*incrementar el valor de las prestaciones y continuar la aplicación de aumentos diferenciales a las de menor monto. A su vez ampliar los bienes y servicios dirigidos a los sectores más sumergidos*”

El GT pondera los esfuerzos realizados de registración e incorporación de un importante número de trabajadores y trabajadoras al empleo formal, y la inclusión de nuevos segmentos ocupacionales al monotributo Sin embargo, el GT destaca la necesidad de identificar el efectivo acceso -a través de indicadores de cobertura de contingencias sociales- a los mecanismos protectorios de seguridad social y recuerda al Estado que en próximos informes (junio 2019) se deben incorporar estos indicadores desagregados por sectores ocupacionales incorporados.

50. El GT toma nota que el Estado parte asume como compromiso de gestión en seguridad social una inclusión con disposiciones “*a medida en grupos o focalizadas a sectores que en sectores o grupos que presentan mayores dificultades de incorporación*”

El GT recuerda al Estado parte que es central que la selectividad no se convierta en regla, sino que el estándar a considerar es la universalidad y que dicho compromiso se traduzca en un principio de universalidad y que garantice la no discriminación.

51. El GT toma en consideración el compromiso de gestión asumido por el Estado Parte de “*profundizar en la mejora de la gestión del sistema de Seguridad Social*” a través de disminuir los tiempos en la gestión y otorgamiento de prestaciones, informatización de procesos, mayor fiscalización y una mejor atención a los afiliados, beneficiarios y contribuyentes del sistema de seguridad social

El GT recomienda al Estado de Uruguay reforzar la acción comunicativa en materia de derechos a la seguridad social para que la población en su conjunto, y no solo los afiliados al sistema, conozca el conjunto de prestaciones que le corresponden como titulares del derecho a la seguridad social. Especialmente el GT recomienda que ante la apertura al proceso de desafiliación voluntaria de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) iniciada por Uruguay, se garantice el acceso a la información y se habilite la posibilidad que continúe la elección por parte de los trabajadores y trabajadoras. Esta recomendación es extendible a todos los derechos económicos, sociales y culturales.

El GT solicita especialmente que se desagregue la información sobre uso de las licencias parentales, con el detalle de los trabajadores y trabajadoras que han hecho

uso, si se trata de mujeres o varones, si pertenecen al ámbito público o privado, entre otra información relevante que es fundamental que consigne. Esta solicitud se extiende a todas las medidas adoptadas en materia de derecho al cuidado.

52. El GT toma nota del compromiso de “potenciar la participación de los sectores sociales en todas las instancias del sistema de Seguridad Social” y en los diversos temas, instancias de gestión como la apertura para la integración del directorio del Banco de Previsión Social, entre otras medidas que el Estado parte asume como responsabilidad.

El GT subraya la relevancia para garantizar estos compromisos, en primer lugar destinar recursos, diseñar fuentes de información adecuadas para relevar información sobre el sistema judicial u otras instancias administrativas o prejudiciales que permitan accionar en caso de incumplimiento de obligaciones en seguridad social. Asimismo, establecer metas concretas de apertura y participación ciudadana, disponer de señales de progreso cualitativas y otros indicadores al respecto, capacitar a funcionarios y magistrados en el alcance del derecho a la seguridad social.

Derecho a la salud

53. El GT celebra los compromisos de gestión que asume la República Oriental de Uruguay al comprometerse en fortalecer el primer nivel de atención en salud con énfasis en la captación precoz y el control del embarazo, que el GT destaca doblemente en tanto se enmarcan en la Agenda 2030 y los compromisos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El GT recomienda contar con datos desagregados desde una perspectiva de género y de la diversidad, destacando la necesidad de sumar esfuerzos aún más contundentes para garantizar la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil, y presentar la tasa de mortalidad materna por grupo de edad, área geográfica, nivel educativo, y quintiles de ingreso; la tasa de mortalidad infantil por sexo, área geográfica, nivel educativo de la madre, y quintiles de ingreso, etnia/raza, neonatal y post natal; porcentaje de la población con acceso al agua potable urbano/rural; porcentaje de personas con acceso a servicios de saneamiento básico urbano/rural.

54. El GT suscribe al compromiso de gestión de la República Oriental del Uruguay, de “hacer foco en las causas de mortalidad infantil más difíciles de evitar cuyo tratamiento requiere de personal y recursos técnicos altamente especializados y cuyo costo es elevado” reafirmando la necesidad de invertir en recurso humano calificado, en las medidas de prevención de enfermedades transmisibles –en especial en materia de HIV-, y de las enfermedades crónicas no transmisibles –que de acuerdo a la información del Estado parte son responsables del 70% de las muertes producidas: cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y pulmonar crónica y renal crónica- y en estimular medidas que involucren una revisión de las capacidades institucionales para llevarlas adelante.

El GT señala la necesidad de destinar mayor cantidad de recursos específicos en materia de salud sexual y reproductiva, tanto a nivel de los efectores de salud como para garantizar la implementación de las leyes vigentes, que entre otras acciones prevén la capacitación de los equipos de salud y la difusión de los derechos de las mujeres y varones a sus derechos reproductivos. Estas recomendaciones ya han sido

elevadas por organizaciones de la sociedad civil y el GT solicita que en futuros informes se informe al respecto, con especial énfasis en acciones participativas con la sociedad civil.

El GT recuerda al Estado parte que ha asumido como compromiso de gestión el suministro de tratamiento anti-retroviral de carácter universal a quienes requieran el tratamiento, siendo central las garantías de provisión, calidad y perdurabilidad del tratamiento de la persona, debiendo el Estado parte monitorear el tratamiento y producir la información necesaria que dé cuenta del mismo.

El GT expresa su preocupación con las actividades de investigación y desarrollo experimental en materia de salud ubicando solamente 0,1%.

El GT reafirma el compromiso que el Estado parte siga aportando al Fondo Nacional de Salud (FONASA), de modo de continuar incrementando la cobertura, en términos de calidad y cantidad.

55. El GT recibe con beneplácito el compromiso de gestión del Estado parte de “universalizar la captación temprana del embarazo (primer trimestre de gestación), realizar la cantidad y calidad de los controles de salud recomendados (6 o más) y reducir los embarazos de riesgo” todas acciones centrales en materia de protección de las mujeres en edades reproductivas.

El GT recomienda al Estado Parte, sumar mayores esfuerzos por garantizar calidad, disponibilidad, adaptabilidad, adecuabilidad y proveer servicios de salud culturalmente respetuosos de la autonomía de las mujeres y de sus pautas culturales, especialmente en el caso de las mujeres afro-uruguayas.

Derecho a la Educación

56. El GT pondera que el Estado parte señale tendencias que resulta necesario revertir como la brecha en la cobertura a mayor edad y el compromiso de avanzar en términos de accesibilidad, calidad, adecuabilidad de las medidas adoptadas para primera infancia, en especial para niños y niñas de 0 a 3 años, como también para los demás niveles de enseñanza. El Estado parte asume que es necesario expandir las horas dedicadas al aprendizaje y reducir la brecha en el aprendizaje existente.

El GT recuerda que el estándar de universalidad y gratuidad en la educación debe ser una prioridad en la actual gestión, bajo resguardos de calidad y adecuabilidad de las acciones impartidas. Para ello resulta central generar los datos y estadísticas desagregadas, con enfoque de género, diversidad racial, nivel socioeconómico, sobre el ejercicio del derecho a la educación. En particular, ampliar el proceso ya existente de recolección de información, con objeto de desarrollar las desagregaciones necesarias para los indicadores señalados en el anexo.

57. El compromiso asumido por Uruguay de fortalecer una mayor oferta técnico profesional, de modo de contribuir –en las próximas décadas– que todos los jóvenes estudien hasta los 18 años y puedan continuar con estudios terciarios es de suma relevancia, pero requiere de políticas universales, integrales e interdependientes. El GT señala que es

fundamental articular con otros sectores sociales, en especial con salud y con políticas de cuidado, para garantizar un grado de avance en esta incorporación.

El GT recuerda además la importancia de disponer de pruebas de evaluación de la calidad educativa y debatir los resultados alcanzados, de modo de identificar los nudos críticos en el proceso de aprendizaje. Asimismo recuerda que el reconocimiento legislativo que los aprendizajes formales y no formales integran el concepto de educación, demanda una revisión –en base a las evaluaciones– de los avances en educación, competencias, calificaciones y demás elementos pedagógicos que hacen a una articulación entre ambas esferas.

El GT considera que la sistematización de los resultados de los Programas implementados, como el caso del Plan Ceibal, los programas de becas e inclusive el Programa Uruguay crece contigo en ámbito de primera infancia, entre otros, representan insumos fundamentales para avanzar en los compromisos de gestión asumidos.

58. El compromiso referido a la universalización en el egreso de educación media básica y media superior sin sobre-edad es uno de los ejes en que el GT recomienda al Estado parte que coloque el mayor esfuerzo. Del informe presentado, las áreas más vulnerables son el desgranamiento educativo en nivel medio y la ampliación de la oferta educativa en primera infancia.

El GT recuerda que el compromiso asumido por la República Oriental del Uruguay para incrementar el Gasto Público en Educación es vital para avanzar en las metas señaladas.

- a. El GT manifiesta preocupación por las tasas de analfabetismo de la población mayor a de 15 años de edad, que en el año 2010 registraba una tasa de analfabetismo del 2%, tendencia ésta que se mantiene estable desde el año 2006.

Recuerda el GT la importancia de desagregar la información por sexo, edad, población afrodescendiente, urbano/rural entre otros, de modo de poder precisar el tipo de acciones necesarias para alcanzar la erradicación.

59. El GT recuerda la imperiosa necesidad de promover indicadores de acceso a la justicia en los tres derechos analizados. En particular recomienda institucionalizar procesos de levantamiento de datos respecto del cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales

El GT recomienda asimismo promover políticas de capacitación de jueces y abogados en materia de derechos sociales, con especial atención al derecho a la seguridad social, a la salud y a la educación.

Otras Recomendaciones

El GT solicita a la República Oriental del Uruguay que disponga de una *amplia difusión a las presentes observaciones finales* correspondientes al primer agrupamiento de derechos (derecho a la seguridad social, a la salud y a la educación) a nivel nacional, de la sociedad en su conjunto, en particular a las áreas y funcionarios responsables en cumplir con las

obligaciones contenidas en los derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador (art. 9, 10 y 13 respectivamente).

El GT recomienda extender estas recomendaciones a los responsables de los tres poderes estatales, tanto los ministerios sectoriales en el ámbito del poder ejecutivo, a los y las magistradas y operadores judiciales, defensores del pueblo e integrantes de los poderes legislativos, las organizaciones de la sociedad civil y a las y los titulares de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, es decir a todos los uruguayos y las uruguayas. El GT recuerda que la evaluación de los informes fue realizada bajo el principio de devolución, de modo que tal como se estableció por la Asamblea General de la OEA: “el trabajo que supone el informe debe redituarse al Estado que lo presentó el beneficio de acotar la lista de necesidades y definir mejor sus carencias”.⁷

El GT ha realizado su tarea bajo la firme convicción que el proceso de revisión representa un paso más allá del mero reporte sino que configura una herramienta necesaria para el accionar estatal que respete el conjunto de derechos humanos, pero también de enorme utilidad para la ciudadanía. El GT celebra que la República Oriental del Uruguay se apropie de esta herramienta de monitoreo y potencie en el corto plazo el instrumento, de manera plural, participativa, interjurisdiccional para que cumpla con su misión de garantizar el cumplimiento del Protocolo de derechos económicos, sociales y culturales del sistema interamericano.

El GT confirma su disposición al Estado parte para continuar las siguientes etapas en el proceso de monitoreo previsto en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, y queda a la espera de la remisión del informe correspondiente al segundo agrupamiento de derechos (derecho al trabajo y derechos sindicales, derecho a la alimentación adecuada, derecho al medio ambiente y derechos culturales) previsto para junio de 2016.

⁷ “Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el Protocolo de San Salvador” (AG/RES. 2074 -XXXV-O/05)

**OBSERVACIONES FINALES AL INFORME DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ANEXO. INDICADORES QUE REQUIEREN INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, A PRESENTAR EN 2019**

A continuación se presentan las tablas con los indicadores que no pudieron ser completados por Uruguay en este primer proceso; con letras mayúsculas se señalan las recomendaciones para cada indicador incompleto (desgloses faltantes se destacan en negritas) o no presentado. En todos los casos que el Estado ya ha brindado la información, se omite la denominación de los indicadores.

La referencia a NO DISPONIBLE fue incluida por el Estado parte asumiendo la inexistencia de dicha información. Se recuerda que es importante que el Estado vaya buscando las formas para poder incorporar a futuro estos indicadores y disponga las fuentes de información futuras para incorporarlas. La no disponibilidad actual no impide que en futuros informes se incorporen.

Se espera que los indicadores se complementen en la presentación del próximo informe que incluya estos derechos, es decir, en junio de 2019; si bien, para los casos en que no se logre disponer de la información necesaria, se deberán señalar los avances establecidos así como el período estimado en que se considera posible su cálculo.

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTRUCTURALES		PROCESOS	RESULTADOS
RECEPCIÓN DEL DERECHO			
INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA	- Porcentaje de población afiliada a regímenes especiales por sexo, etnia, raza y nivel educativo SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN	INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA.
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS			
INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA	- Existencia de mecanismo para eximir los costos de litigio. Requisitos para calificar para este beneficio. SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN -Disponibilidad y/o utilización de fondos extrapresupuestarios para financiar el sistema de seguridad social -o su déficit. SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN	
Señales de progreso			

INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA		
CAPACIDADES ESTATALES			
INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA	<p>- Total de cotizantes régimen contributivo por edad, sexo, nacionalidad, condición jurídica, categoría ocupacional y rama de actividad SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Tasa de cobertura por accidentes de trabajo por sexo, edad, condición jurídica, categoría ocupacional y rama de actividad SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>	<p>-Brecha entre cobertura previsional pública y privada SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>
Señales de progreso			
- Cobertura y alcance de políticas públicas de inclusión de los no afiliados al sistema de seguridad social. SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN		- Campañas oficiales en materia de prevención de riesgos del trabajo SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN	
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN			
INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA	<p>- Base de cálculo de las prestaciones de seguridad social para varones y mujeres SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Extensión y formas de utilización de tablas actuariales en el cálculo del beneficio previsional (haber de la pensión) SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>	INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA.
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN			

INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA	<ul style="list-style-type: none"> - Reglamentación existente y tipo de control de la aplicación de medidas preventivas en riesgos profesionales y salud ocupacional SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN - Frecuencia de los informes enviados a los cotizantes de los sistemas previsionales, tanto por cuentas de capitalización individual como por régimen público de reparto SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN - Total de accidentes de trabajo reportados por jurisdicción y por rama de actividad SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN 	
Señales de progreso			
INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA	Características de portales de Internet, cobertura televisiva, ventanillas específicas de la información brindada sobre derechos a los receptores de programas de cobertura graciable o no contributiva SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN	
ACCESO A LA JUSTICIA			
<ul style="list-style-type: none"> - Instancias administrativas para radicar denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho a la seguridad social. SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN - Cantidad de acciones constitucionales (amparos, acciones de protección, tutela) en seguridad social SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN 		<ul style="list-style-type: none"> - Número de denuncias relativas al derecho a la seguridad social recibidas SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN - Duración promedio de los casos tramitados por la defensoría oficial sobre pensiones (contributivas y no contributivas) SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN - Existencia de organismos estatales de control 	

<p>- Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la seguridad social. SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>-Existencia de oficinas públicas de mediación o conciliación para resolver cuestiones vinculadas con seguridad social. SE SOLICITA SU INCORPORACION</p> <p>- Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de seguridad social: i) independencia e imparcialidad del tribunal; ii) plazo razonable; iii) igualdad de armas; iv) cosa juzgada; v) vías recursivas de sentencias en instancias superiores. SE SOLICITA SU INCORPORACION</p>	<p>y fiscalización de las entidades encargadas de fondos de capitalización individual por entidades privadas SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>-Existencia de organismos estatales de control y fiscalización de entidades privadas encargadas de fondos de salud y/o accidentes/riesgos de trabajo SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Número de decisiones judiciales que otorgan cobertura de contingencia en seguridad social SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Número de acciones judiciales presentadas y resueltas por denegatoria de una pensión no contributiva SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Políticas de capacitación de jueces y abogados en derecho a la seguridad social. Cobertura temática y alcance. SE SOLICITA SU INCORPORACION</p>	
<p>Señales de progreso</p>	<p>- Características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de sus derechos en relación con la seguridad social. SE SOLICITA SU INCORPORACION</p> <p>- Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas. SE SOLICITA SU INCORPORACION</p>	

DERECHO A LA SALUD

ESTRUCTURALES		PROCESOS	RESULTADOS
RECEPCIÓN DEL DERECHO			
INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA	INFORMACIÓN ENTREGADA.	<p>COMPLETA</p> <p>- Tasa de mortalidad infantil por sexo, por área geográfica, nivel educativo de la madre, quintiles de ingreso, etnia/raza, neonatal y post-natal. SE SOLICITA SU INCORPORACION. INDICADORES ODM</p> <p>- Tasa de mortalidad por sexo debido a accidentes, homicidios o suicidios. SE SOLICITA SU INCORPORACION</p> <p>- Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles. SE SOLICITA SU INCORPORACION</p> <p>- Porcentaje de la población con acceso a agua potable urbano/rural. SE SOLICITA SU INCORPORACION. INDICADOR ODM</p> <p>- Porcentaje de personas con acceso a servicios de saneamiento básico urbano/rural. SE SOLICITA SU INCORPORACION. INDICADOR ODM</p> <p>- Porcentaje de mujeres en edad reproductiva con anemia. SE SOLICITA SU INCORPORACION.</p>
Señales de progreso			
INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA	INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS			

INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA	INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA	INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA.
Señales de progreso			
INFORMACIÓN ENTREGADA.	COMPLETA		
CAPACIDADES ESTATALES			
- Densidad del personal profesional auxiliar por cantidad de camas de hospital SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN		-Porcentaje de servicios de salud de responsabilidad pública subcontratados a compañías privadas u otro tipo de efectos SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN	- Tasa de utilización de los servicios de salud NO DISPONIBLE
-Características, extensión, montos y gestión de asistencia técnica y financiera internacional en el área de la salud SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN			
Señales de progreso			
		- Existencia de planes/políticas para fortalecer la adaptabilidad cultural de los servicios de salud bajo un enfoque de derechos y étnico. SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN	
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN			

<p>-Ley o política nacional de salud considerando la diversidad étnica (indígenas, afrodescendientes) SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Tipo, número, características, jurisdicción, presupuesto y accesibilidad a los servicios de salud mental por distribución territorial SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>	<p>- Estimaciones de abortos inducidos, por edad, lugar de residencia (urbano o rural) y condiciones socioeconómicas. SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Porcentaje de mujeres y varones en edad de procrear que usan anticonceptivos SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Porcentaje de la población que utiliza sistemas indígenas o alternativos de atención de la salud NO DISPONIBLE</p> <p>- Porcentaje de niños y niñas cubiertos por programas nutricionales NO DISPONIBLE. NO EXISTEN PROGRAMAS JURISDICCIONALES</p> <p>-Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben periódicamente atención/controles médicos NO DISPONIBLE. DATOS EXISTENTES PERO NO PROCESADOS</p> <p>- Porcentaje de niños y niñas que reciben asistencia en salud perinatal y hasta los cinco años. NO DISPONIBLE. DATOS EXISTENTES PERO NO PROCESADOS</p> <p>-Porcentaje de mujeres embarazadas con test de HIV/SIDA SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>	<p>-Prevalencia del uso de anticonceptivos entre población adulta sexualmente activa NO DISPONIBLE</p> <p>- Tasa de fecundidad no deseada NO DISPONIBLE</p>
--	--	---

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		
		- Porcentaje de niños nacidos con malformaciones fetales por consumo de alcohol y otro tipo de drogas SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN
Señales de progreso		
- Características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión del derecho a la salud. SE SOLICITA SU INCORPORACION.	-Características y frecuencia de estudios de percepción de la población en relación con enfermedades de transmisión sexual (HIV-SIDA, entre otras) SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN	
ACCESO A LA JUSTICIA		
Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la salud. SE SOLICITA SU INCORPORACION.	- Número de decisiones judiciales que ha hecho lugar a garantías en salud en general y en casos específicos (salud sexual y reproductiva, personas con HIV-SIDA; entre otras) SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN	
- Existencia de oficinas públicas de mediación o conciliación para resolver cuestiones vinculadas con salud. SE SOLICITA SU INCORPORACION.	- Número de denuncias relativas al derecho a la salud recibidas, investigadas y resueltas por las instituciones nacionales de derechos humanos competentes en el país SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN	
-Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de salud: i) independencia e imparcialidad del tribunal; ii) plazo razonable; iii) igualdad de armas; iv) cosa juzgada; v) vías recursivas de sentencias en instancias superiores. SE SOLICITA SU INCORPORACION.	-Políticas de capacitación de jueces y abogados en materia de derecho a la salud. Cobertura temática y alcance SE SOLICITA SU INCORPORACION.	
Señales de progreso		

	- Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas. SE SOLICITA SU INCORPORACION.	
--	---	--

DERECHO A LA EDUCACIÓN

ESTRUCTURALES	PROCESOS	RESULTADOS
EXCEPCIÓN DEL DERECHO		
FORMACIÓN NTREGADA.	COMPLETA	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de los estudiantes que comienzan el nivel preescolar y primer grado y llegan al último año de la enseñanza primaria. SE SOLICITA SU INCORPORACION. - Porcentaje de escolarización y de finalización de la educación primaria por sexo, etnia/raza y zona geográfica SE SOLICITA SU INCORPORACION. - Porcentaje de escolarización y de finalización de la educación secundaria por sexo, etnia/raza y zona geográfica SE SOLICITA SU INCORPORACION. - Porcentaje de niñas y niños no escolarizados. SE SOLICITA SU INCORPORACION. - Porcentaje de adolescentes no escolarizados. SE SOLICITA SU INCORPORACION. INDICADOR ODM - Número medio de años de escolaridad completados por sexo, grupos de edad (perfil educativo y adultos), etnia/raza, área geográfica y quintiles de ingreso. SE SOLICITA SU INCORPORACION. - Tasa neta de matrícula, según nivel de enseñanza, por sexo, edad, etnia /raza, área geográfica y quintiles de ingreso.

		SE SOLICITA SU INCORPORACION.
Señales de progreso		
Número, tipo, características de organizaciones de la sociedad civil registradas que participan en la promoción, implementación y la protección del derecho a educación E SOLICITA SU INCORPORACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Encuestas y/o estudios sobre el grado de satisfacción de los destinatarios del sistema educativo considerando si el mismo es SE SOLICITA SU INCORPORACION. - Encuestas y/o estudios sobre el grado de satisfacción y cobertura de los programas SE SOLICITA SU INCORPORACION. 	
ONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		
Monto y extensión de incentivos, deducción e impuestos (incentivos fiscales) y subsidios para el sector privado de la educación por nivel de instrucción E SOLICITA SU INCORPORACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Gasto privado en educación, como porcentaje del PIB. SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN 	<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño de la sección de alumnos por docente, según nivel de enseñanza SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN - Porcentaje promedio de ingresos del hogar gastados en educación por quintil de ingreso SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN
Señales de progreso		
	INFORMACIÓN ENTREGADA.	
APACIDADES ESTATALES		
Porcentaje de escuelas que participan en programas de evaluación de contenidos y calidad educativa E SOLICITA SU INCORPORACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de establecimientos educativos (en todos los niveles incluyendo el SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN 	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de jóvenes y adultos que participa en programas de formación y capacitación continua presenciales y a distancia, por sexo y zona geográfica SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN - Porcentaje de jóvenes procedentes de la educación técnico-profesional que acceden al empleo al finalizar sus estudios y en

<p>área de educación</p> <p>E SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>		<p>puestos afines con su capacitación, por sexo y zona geográfica</p> <p>SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>
<p>señales de progreso</p>		
	INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA	
<p>IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN</p>		
<p>Inclusión de enfoque de género, de derechos humanos y de cultura de pueblos indígenas y afrodescendientes en los contenidos básicos comunes</p> <p>E SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>	<p>- Existencia de programas, alcance y cobertura de sostenibilidad del aprendizaje de la cultura escrita</p> <p>SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>	<p>- Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los varones de 15 a 24 años de edad</p> <p>SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Porcentaje de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a etnias, población indígena, afrodescendiente, campesina escolarizados en la educación inicial, primaria y secundaria básica</p> <p>SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>-Porcentaje de alumnado de minorías étnicas, poblaciones originarias y afrodescendientes que realiza estudios de educación técnico- profesional (ETP) y universitarios</p> <p>SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>-Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en escuelas regulares del sistema educativo</p> <p>SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>-Máximo nivel educativo alcanzado de niños, niñas adolescentes afrodescendientes por sexo y por lugar de residencia (urbano/rural)</p> <p>SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>
<p>señales de progreso</p>		
	INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA	

CCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

<p>INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA. A FUTURO SE SOLICITA E INCLUYAN DATOS ESPECÍFICOS DE OBERTURA EN EL PROPIO INFORME.</p>	<p>-Número de proyectos presentados y aprobados en los que diferentes sectores sociales participan y que se aplican de forma integrada al diseño de la educación SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>
<p>Señales de Progreso</p>	
<p>Características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión del derecho a la educación SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>	<p>- Características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de su derecho a la educación en todos los niveles del sistema (educación formal, no formal, primera infancia, EDJA) N SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p>
<p>CCESO A LA JUSTICIA</p>	

<p>Existencia de instancias administrativas para declarar denuncias en materia de cumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho a la educación E SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>Existencia de instancias contenciosas administrativas. E SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>Existencia de acciones constitucionales imparos, acciones de protección, tutela). E SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la educación E SOLICITA SU INCORPORACION.</p> <p>Existencia de oficinas públicas de mediación conciliación para resolver cuestiones vinculadas con educación E SOLICITA SU INCORPORACION.</p> <p>Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de educación: i) independencia e imparcialidad del tribunal; ii) plazo razonable; iii) igualdad de armas; iv) cosa juzgada; v) vías recursivas de sentencias en instancias superiores E SOLICITA SU INCORPORACION.</p>	<p>- Número de decisiones judiciales que ha hecho lugar a garantías en educación SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Número de denuncias relativas al derecho a la educación recibida, investigadas y resueltas por la instituciones nacionales de derechos humanos y/o educativas competentes en el país. SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <p>- Políticas de capacitación de jueces y abogados en derecho a la educación. Cobertura temática y alcance. SE SOLICITA SU INCORPORACION.</p>	
<p>Señales de progreso</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - Características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de sus derechos en relación con la educación <p>SE SOLICITA SU INCORPORACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas. <p>SE SOLICITA SU INCORPORACION.</p>	
--	--	--